

OEA/Ser.L/V/II
Doc. 158
14 julio 2021
Original: español

INFORME No. 150/21
PETICIÓN 172-15
INFORME DE ADMISIBILIDAD

PUEBLO RAPA NUI
CHILE

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 14 de julio de 2021.

Citar como: CIDH, Informe No. 150/21. Petición 172-15. Admisibilidad. Pueblo Rapa Nui. Chile. 14 de julio de 2021.

I. DATOS DE LA PETICIÓN

Parte peticionaria	Ciro Colombara López, Branislav Marelic Rokov, Jennifer Alfaro Montecinos, Alberto Hotus Chávez y Eryt Teave Hey
Presunta víctima	Pueblo Rapa Nui
Estado denunciado	Chile ¹
Derechos invocados	Artículo 21 (derecho a la propiedad) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ² en relación con el artículo 1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno)

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH³

Recepción de la petición	23 de enero de 2015
Información adicional recibida durante la etapa de estudio	16 de abril, 28 de agosto y 8 de octubre de 2015; 13 de abril de 2016 y 20 de febrero de 2017
Notificación de la petición	25 de abril de 2017
Primera respuesta del Estado	12 de octubre de 2017
Observaciones adicionales de la parte peticionaria	18 y 27 de septiembre y 15 de noviembre de 2017, 12 de febrero de 2018 y 1 de octubre de 2020
Observaciones adicionales del Estado	12 de noviembre de 2017 y 15 de agosto de 2020
Medida Cautelar levantada	MC-321-10 otorgada el 7 de febrero de 2011 y levantada el 31 de octubre de 2011

III. COMPETENCIA

<i>Ratione personae</i>	Sí
<i>Ratione loci</i>	Sí
<i>Ratione temporis</i>	Sí
<i>Ratione materiae</i>	Sí, Convención Americana (depósito de instrumento de ratificación realizado el 21 de agosto de 1990)

IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Duplicación y cosa juzgada internacional	No
Derechos admitidos	Artículos 4 (derecho a la vida), 8 (garantías judiciales), 12 (libertad de conciencia y religión), 21 (derecho a la propiedad) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con sus artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno)
Agotamiento de recursos o procedencia de una excepción	Sí, en los términos de la sección VI
Presentación dentro de plazo	Sí, en los términos de la sección VI

V. RESUMEN DE LOS HECHOS ALEGADOS

1. La petición alega responsabilidad internacional del Estado chileno por la presunta violación del derecho a la propiedad colectiva del Pueblo Rapa Nui sobre el territorio y recursos naturales de Isla de Pascua y de su derecho a la autonomía. La parte peticionaria describe que a pesar que las solicitudes por el reconocimiento y autonomía del Pueblo de Rapa Nui han sido constantes desde hace más de 125 años, actualmente más del 70% de su territorio ancestral es manejado y se encuentra bajo propiedad del Estado lo cual ha ocasionado de forma irremediable un daño en el estilo de vida y el desarrollo del pueblo indígena. En

¹ Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión, la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, de nacionalidad chilena, no participó en el debate ni en la decisión del presente asunto.

² En adelante "la Convención Americana" o "la Convención".

³ Las observaciones de cada parte fueron debidamente trasladadas a la parte contraria.

este sentido, la parte peticionaria insiste en el deber del Estado de restituir la tierra para proteger la propiedad ancestral del Pueblo Rapa Nui, y su derecho a la libre determinación.

2. La parte peticionaria explica que la tierra para las y los Rapanui como pueblo indígena, juega un rol de suma importancia no solo económico, sino que también se relaciona con su cosmovisión, expresión y desarrollo de su vitalidad física, de su cultura y espiritualidad. En particular la parte peticionaria describe que la estrecha vinculación del Pueblo Rapa Nui con la tierra debe ser entendida como patrimonio inalienable y símbolo histórico ancestral de su cultura, como también la base de subsistencia diaria, en tanto su supervivencia depende del adecuado manejo, preservación y uso del terreno de la isla. Asimismo, detalla que el Pueblo Rapa Nui concibe al agua como fuente de vida y vínculo de armonía espiritual de todos sus miembros, lo cual se ve manifestado artística, religiosa y espiritualmente en los numerosos vestigios arqueológicos y jeroglíficos ubicados en sectores sagrados. En tal respecto, la parte peticionaria argumenta que esta vinculación del Pueblo Rapa Nui con el agua descansa en la continua y exitosa administración del mar y sus recursos de la mano de una preocupación espiritual por su conservación y desarrollo.

3. Manifiesta que históricamente el Estado ha mantenido una voluntad colonizadora controlando las necesidades del Pueblo Rapa Nui a través de las instituciones chilenas lo cual, junto a las graves vulneraciones a los derechos humanos del Pueblo Rapa Nui, ha resultado en una desconfianza del pueblo indígena hacia las políticas estatales. La parte peticionaria narra que, luego de décadas bajo el control de asentamientos occidentales, el 8 de septiembre de 1888 el Estado de Chile y el Pueblo Rapa Nui, representado por su Rey, pactaron un “Acuerdo de Voluntades” de acuerdo al cual el pueblo indígena reconocía la cesión de soberanía a favor del Estado chileno, mientras el Estado se comprometía a reconocer el derecho a la propiedad sobre la tierra, el respeto de las investiduras de los jefes rapanui y a dar protección y desarrollo socioeconómico a los habitantes de la isla; sin embargo afirma que el “Acuerdo de Voluntades” nunca fue cumplido por el Estado y, por el contrario, la isla le fue otorgada en concesión a la Compañía Explotadora de Isla de Pascua (en adelante “CEIP”). Destaca que el Estado de Chile en el año 1933 inscribió de forma ilícita, sin el conocimiento del pueblo indígena⁴, la totalidad de la Isla de Pascua o Rapa Nui como tierras fiscales del Estado basándose en el principio de *terra nullis*, tierras sin dueño. Agrega que dicha inscripción mantiene plena validez y ha servido de sustento jurídico de todas las acciones que el Estado chileno ha realizado en la isla, en especial para la instalación de servicios públicos para la regulación del Parque Nacional; para el cobro de concesiones marítimas; para el “otorgamiento de títulos individuales de propiedad” e incluso la transferencia de parte de la isla a particulares no indígenas.

4. Describe que, sin resguardo de los bienes arqueológicos o de sus habitantes y sin la participación de los mismos, el Estado en 1935 declaró a la isla un parque nacional mediante el Decreto Supremo No. 103 del Ministerio de Tierras y Colonización de fecha 16 de enero de 1935, y Monumento Histórico Nacional mediante Decreto No. 4.536 del Ministerio de Educación Pública de fecha 23 de julio de 1935, primero bajo la administración de la CEIP y luego, en 1953, bajo la administración directa de la Armada Nacional. Asimismo, refiere que, bajo una lógica de reparación histórica a los Rapa Nui⁵, el Estado publicó el 1 de marzo de 1966 la Ley No. 16.441 mediante la cual creó el departamento de Isla de Pascua, reconoció finalmente plena ciudadanía al Pueblo Rapa Nui y estableció una serie de beneficios tributarios. Señala además que mediante modificación constitucional del artículo 126 bis, el Estado declaró en el 2007 a Isla de Pascua como territorio especial en virtud a su “extrema ubicación geográfica” sin hacer alusión a su carácter especial por constituir un territorio netamente indígena⁶.

⁴ La parte peticionaria explica que esta inscripción tuvo lugar sin consultar a los miembros del Pueblo Rapa Nui y ocurrió en una época en la cual los mismos no podían salir de la isla por lo que les fue imposible objetar dicha decisión.

⁵ La parte peticionaria destaca de la mano el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, emitido en el 2008, como reconocimiento del Estado que incumplió los compromisos adquiridos en virtud del Tratado de 1888 y que fue responsable, directa o indirectamente, de sistemáticas violaciones a los derechos humanos del Pueblo Rapa Nui, incluido el derecho a la propiedad colectiva a raíz de la inscripción a nombre del Fisco de la totalidad del territorio.

⁶ La parte peticionaria explica que, en virtud al referido artículo de la Constitución, el gobierno y administración de la isla debe estar regulado por un estatuto especial de administración. En tal sentido, apunta que luego de más de una década el Estado dictó el Estatuto Especial de Autonomía mediante la Ley No. 20.193, no obstante, sostiene que esta norma no atiende a las problemáticas existentes debido a la inexistencia de voluntad política del Estado.

5. En dicho contexto, sostiene que la petición se presenta por situaciones recientes que demuestran el continuo desconocimiento de la propiedad colectiva del Pueblo Rapa Nui sobre la Isla de Pascua. En concreto, alega que el Parlamento Rapa Nui, representado por el Rey de Rapa Nui, interpuso el 20 de enero de 2012 una acción resolutoria civil del “Acuerdo de Voluntades” contra el Fisco ante el Segundo Juzgado de Valparaíso sosteniendo que el Estado no había iniciado gestiones para que el Congreso lo ratificase, que el Pueblo Rapa Nui le cedió la soberanía no la propiedad y señaló la afectación a la propiedad sobre su territorio a través de la inscripción de la isla como bien fiscal en 1933. Describe que dicha acción fue rechazada en primera y segunda instancia, el 20 de enero y 24 de julio de 2014, respectivamente, bajo los considerandos que el Acuerdo de Voluntades se regía por los principios de derecho internacional y no derecho civil; que mediante este tratado se dio inicio a la soberanía nacional por lo tanto no era posible admitir que mediante una acción de dicha naturaleza se afecte la soberanía nacional y el dominio del territorio de Chile; y que se había cumplido el plazo para la prescripción de la acción. En particular, la Corte de Apelaciones consideró mediante sentencia del 24 de julio de 2014 con resolución del 28 de agosto de 2014, que la isla había quedado formalmente bajo la soberanía nacional de Chile desde el 9 de septiembre de 1888.

6. De la mano a lo anterior, alega que el Consejo de Ancianos del Pueblo Rapa Nui, presidido por Alberto Hotus, remitió una solicitud al Subsecretario para las Fuerzas Armadas para el cese del cobro ilegal contra pescadores del Pueblo Rapa Nui por pesca artesanal en el borde costero, por derechos por concepto de concesión marítima de acuerdo a lo establecido por la Ley de Pascua⁷. Relata que el 3 de marzo de 2014, dicha Subsecretaria denegó la solicitud argumentando que el beneficio era aplicable solo a los impuestos, contribuciones y gravámenes de carácter tributario, naturaleza que no revestían las rentas y tarifas por concepto de concesión marítima. Ante dicha respuesta, el 4 de abril de 2014 el presidente del Consejo de Ancianos interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando el cese del cobro de concesiones marítimas alegando una vulneración al ejercicio de su derecho de propiedad colectiva sobre la tierra y sus recursos, el cual fue acogido el 6 de agosto de 2014 por la Corte de Apelaciones de Santiago ordenando el cese del cobro⁸. Sin embargo, la Corte Suprema mediante sentencia de 24 de noviembre de 2014 con resolución de 4 de diciembre del mismo año, revocó esta decisión argumentando la interposición extemporánea del recurso en tanto el plazo de 30 días debía contarse desde el otorgamiento de una concesión, la cual había sido otorgada en el 2011, y no desde la respuesta formal de la Subsecretaria a un requerimiento del Consejo de Ancianos.

7. La parte peticionaria argumenta que, de manera paralela a estos procesos descritos, durante el año 2014, líderes y lideresas Rapa Nui intentaron entablar un diálogo con las autoridades de Chile con la intención de mantener sus demandas históricas por autonomía del pueblo, por recuperación de su territorio y por el cumplimiento cabal del Acuerdo de Voluntades. Relata que el 7 de agosto de 2014 distintos miembros enviaron una carta a la presidenta de la República con el fin de iniciar un proceso de devolución de las tierras, la cual fue respondida el 3 de octubre de 2014 señalando que la solicitud sería “redirigida” a los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Desarrollo Social. En tal sentido, afirma que la última década se ha caracterizado por constantes negociaciones infructuosas con el Estado en el marco de las cuales el Estado únicamente ha reconocido como representativo del Pueblo Rapa Nui para efectos de establecer diálogos mutuos a la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (en adelante “CODEIPA”), una comisión creada en virtud a la Ley No. 19.253 o Ley Indígena que se compone de agentes del Estado que participan con derecho a voz y voto.

⁷ La parte peticionaria señala que la Ley No. 16.441 de 1966 “que crea el Departamento de Isla de la Pascua” estableció una serie de beneficios tributarios en la lógica de reparación histórica lo cual lo consideran una materialización parcial del Acuerdo de Voluntades. En particular señalan que el artículo 41 de la misma Ley estipula: *Los bienes situados en el departamento de Isla de Pascua y las rentas que provengan de ellos o de actividades desarrolladas en él, estarán exentos de toda clase de impuestos o contribuciones, incluso la contribución territorial, y de los demás gravámenes que establezca la legislación actual o futura. De igual exención gozarán los actos o contratos que se ejecuten o celebren en el departamento de Isla de Pascua por personas domiciliadas en él respecto de actividades o bienes que digan relación con ese mismo territorio*”.

⁸ La Corte de Apelaciones consideró que “este actuar ilegal de la autoridad administrativa vulnera abiertamente el derecho de propiedad de los habitantes de la Isla de Pascua, en los términos descritos en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política, perturbando el ejercicio de este derecho al establecer un cobro de carácter administrativo que como ya se ha señalado, vulnera expresamente una disposición legal”.

8. Agrega que, a raíz de la falta de atención por parte del Estado a la reclamación territorial del Pueblo Rapa Nui, miembros del Pueblo Rapa Nui han sostenido protestas desde marzo de 2015, lo cual ha generado tensión entre miembros del pueblo indígena y otros habitantes de la isla. Así, la parte peticionaria afirma que, como forma de protesta, miembros del pueblo indígena han bloqueado centros arqueológicos y parques ante los problemas de sobrepoblación, desabastecimiento, contaminación, y conectividad y acceso a servicios básicos que consideran se suman a la violación de su derecho de propiedad indígena.

9. En tal respecto, la parte peticionaria afirma que desde inicios de los 90 y en particular el 2010 la isla ha tenido un crecimiento y desarrollo descontrolado debido al auge de la industria turística resultando en un aumento exponencial de la población que habita la isla⁹, del costo de la vida y en la generación de basura, el consumo de agua y energía, el uso y necesidad de automóviles, la saturación de servicios, así como restricciones de acceso a la educación y salud¹⁰ y la pesca excesiva. El descontrolado aumento demográfico llevó a las autoridades de Rapa Nui a solicitar al Estado, la creación de una regulación especial para efectos de poder mantener sostenible la habitabilidad de la isla en el tiempo. Alega que si bien el 1 de agosto de 2018 fue publicada la Ley No. 21070 que “regula los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua”, el texto de dicha norma publicada resultó ser sustancialmente distinto al proyecto inicial consultado al Pueblo Rapa Nui y aprobado por sus autoridades. Argumenta que ha sido seriamente insuficiente para responder a su motivación de mitigar los efectos generados a partir del incremento poblacional otorgando plazos que permitirían tomar medidas correspondientes para enfrentar posibles saturaciones del sistema, y, en vez de solucionar problemas ambientales, ha legitimado a las personas que no forman parte del pueblo Rapa Nui a residir en la isla conforme a un gran listado de causales habilitantes¹¹. En consecuencia, explica que, desde el 3 de mayo de 2019, mediante Decreto No. 1428 de 19 de noviembre de 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, el territorio especial de Isla de Pascua se encuentra en un estado de latencia ambiental respecto a la capacidad de carga demográfica debido a la saturación de servicios, sobrepoblación y crisis ambiental.

10. De la mano, argumenta que el Estado ha abandonado sus obligaciones sociales en tanto todas las necesidades en materia de transporte, comunicaciones, abastecimiento y ambiental recaen en empresas privadas y transnacionales. Explica que las instituciones públicas del Estado son incapaces de funcionar como el ordenamiento jurídico continental ordena puesto que ninguna normativa nacional ha sido creada tomando en consideración las distintas y únicas condiciones geográficas y culturales del Pueblo Rapa Nui. Asimismo, recalca la nula protección del Estado respecto del territorio marítimo en tanto desde hace más de una década barcos de origen asiático principalmente pesqueros han depredado la zona marina del Pueblo Rapa Nui llevando al borde de la extinción numerosas especies marinas.

11. Por otro lado, describe la parte peticionaria que el 18 de agosto de 2016 el gobierno nacional otorgó en coadministración las tierras Rapa Nui suscribiendo un “Convenio de Asociatividad entre la Corporación Nacional Forestal (en adelante “CONAF”) y la comunidad indígena Ma’u Henua para efectos de coadministrar el Parque Nacional¹² y representar los intereses Rapa Nui. En virtud de dicho convenio se traspasaron al Pueblo Rapa Nui limitadas atribuciones para las cuales la CONAF debía los ingresos generados por concepto de cobro de entradas y otros usos de las áreas de uso público. Alega asimismo que, bajo dicho convenio, el Estado se comprometió a transferir la administración plena del Parque Nacional Rapa Nui al Pueblo Rapa Nui a más tardar el 9 de septiembre de 2017, lo cual concretó el 27 de noviembre de 2017, en virtud del

⁹ La parte peticionaria explica que de acuerdo al censo nacional del 2017, se contaba con 7.750 habitantes de los cuales 3.512 personas se identificaron como miembros del Pueblo Rapa Nui. No obstante, destaca que estas cifras no se apegan a la realidad, detallando que hasta noviembre de 2019 las fichas médicas del Hospital Hanga Roa, único centro de salud, ascendían a un total de 10.900 fichas activas durante el periodo de noviembre de 2018 y 2019. Agrega que en promedio existe una población flotante de aproximadamente 9 mil personas, resultando en un total de más 16 mil personas.

¹⁰ Afirma que el Hospital Hanga Roa es el único acceso a la salud por parte de la población en Isla de Pascua el cual está calificado como centro de salud de “menor complejidad”. Relata que dicho centro de salud no cuenta con personal suficiente capacitado por lo que la atención secundaria de salud se resuelve mediante visitas periódicas o rondas organizadas de especialistas del servicio de salud.

¹¹ La parte peticionaria detalla que para el 11 de agosto de 2020, se cuentan con 5.384 solicitudes de autorización legal para residir por parte de personas ajenas al Pueblo Rapa Nui, de las cuales 5.107 ya estarían aprobadas.

¹² La parte peticionaria argumenta que dentro de los límites del Parque Nacional Rapa Nui existen alrededor de 125 mil sitios arqueológicos de gran significado sagrado y espiritual para sus habitantes quienes mantienen una cultura viva mediante la celebración de tradiciones que comprenden lengua, baile, música y gastronomía. No obstante, los Rapa Nui no puedan hacer ocupación de ellos solo visitarlos.

Decreto No. 119, mediante la figura jurídica de una concesión de 50 años. Afirma que, si bien desde el 2017 se ha permitido un mayor acceso por parte de los miembros del pueblo indígena a sus sitios sagrados a raíz de la administración de la Comunidad Ma'u Henua, las condiciones de propiedad no han cambiado. Alega que en la actualidad la mayor parte del territorio de la isla corresponde a propiedad del Estado repartido entre el Fundo Vaitea y el Parque Nacional, lo cual amenaza la identidad y unidad de los Rapa Nui, sus derechos de autodeterminación, además de sus derechos a la tierra y a los recursos naturales.

12. En particular, explica que la propiedad en Isla de Pascua se regula únicamente mediante las leyes del Estado particularmente disposiciones contenidas en el Código Civil de 1857, lo cual implica una seria vulneración a la forma tradicional en que la propiedad es entendida por el pueblo indígena. Alega que a la fecha los miembros del pueblo indígena pueden adquirir el dominio individual de los terrenos que otros Rapa Nui venden o transfieren mientras que el Estado, como propietario del 70% de la propiedad de la tierra, entrega en “cesión de derechos” a personas que requieren de soluciones habitacionales mediante el Ministerio de Bienes Nacionales, sin reconocer el dominio o derecho de propiedad¹³. Asimismo, destaca que el Estado igualmente despojó al Pueblo Rapa Nui de la propiedad y administración del mar mediante el Decreto No. 10 del Ministerio de Medioambiente del 8 de junio de 2018 al crear una figura de administración del territorio marítimo denominada Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Rapa Nui. Explica que, bajo la mencionada norma, la administración corresponde a un consejo directivo compuesto por 6 representantes elegidos por el Pueblo Rapa Nui y 5 representantes del Estado, afectando el territorio marítimo Rapa Nui que ya estaba protegido por la Ley No. 20.249¹⁴. En dicho contexto sostiene que, para hacer uso del suelo ancestral con borde costero, el Estado exige solicitar permisos de concesión a la Armada los cuales muchas veces son otorgadas por periodos de tiempo limitado previo cobro de un valor pecuniario.

13. Argumenta además que, a pesar que el derecho de propiedad obligaría al Estado a iniciar un proceso destinado a modificar esta situación, no hay otro recurso judicial ante autoridades internas para efectos de poder discutir la procedencia del reconocimiento de la propiedad colectiva de un pueblo indígena sobre un determinado territorio y sobre sus recursos jurisdiccionales específicos. Aduce que esta falta de recursos sitúa a los peticionarios en un estado de indefensión. Asimismo, destaca en particular que, bajo el criterio estricto de 30 días para interponer el recurso de protección para cautelar los derechos humanos, es ilusorio pensar que el Pueblo Rapa Nui pueda cuestionar la usurpación de tierras que sufrió en 1888 y en 1933 producto del incumplimiento del Acuerdo de Voluntades y de la inscripción fiscal y cuyos efectos se mantienen hasta el presente. Finalmente sostiene que las medidas tomadas en relación a planes y programas que ha realizado el Estado a lo largo del tiempo en la isla, resultan insuficientes cuando la discusión de fondo es el derecho de propiedad y su falta de reconocimiento.

14. En cuanto al argumento presentado por el Estado sobre la falta de agotamiento de los recursos internos, explica que de acuerdo al artículo 764 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación es aquel acto jurídico procesal que se concede a las partes para invalidar una sentencia cuando se ha dictado en un procesamiento viciado o con omisión de las formalidades; o cuando el tribunal ha infringido la ley decisoria del conflicto al resolverlo. Argumenta que el recurso de casación en sus diferentes expresiones tanto en la forma como en el fondo, es un recurso procesal extraordinario que tiene causales estrictamente establecidas por ley con una alta tasa de inadmisibilidad. Alega por lo tanto que el último recurso ordinario que agota la jurisdicción doméstica y es apto en la mayoría de los casos es el recurso de apelación.

15. Por su parte, el Estado sostiene que ha tomado diversas medidas legislativas y administrativas en el reconocimiento legal a los pueblos y tierras indígenas, tales como la promulgación de normativas y el establecimiento de planes y programas que reconocen y protegen sitios ceremoniales, incluyendo del pueblo Rapa Nui. El Estado señala la Ley No. 16.441 “Ley de Pascua” de 1966, gracias a la cual se crearon los servicios estatales en la isla y una serie de beneficios y exenciones; el decreto ley No. 2.885 de 1979 como primera herramienta de reivindicación de tierras para el pueblo y la creación del Parque Nacional Rapa Nui en 1935, el

¹³ Al respecto, destaca un caso que considera emblemático del Hotel Hanga Roa, construido por capitales extranjeros gracias a que el Estado les entregó la propiedad de un terreno de un clan Rapa Nui.

¹⁴ Sostiene que la Ley No. 20.249 reconocía de forma específica el derecho de las comunidades costeras de los pueblos originarios a los espacios que han utilizado consuetudinariamente incluyendo la propiedad y administración del territorio marítimo Rapa Nui a dicho pueblo indígena.

cual actualmente ocupa más de 43% del territorio de la isla, y desde el 2015 opera bajo un régimen de coadministración con la comunidad indígena Ma'u Henua, entidad representativa del Pueblo Rapa Nui, para fortalecer el cuidado su patrimonio tanto cultural como natural, así como el impulso de una iniciativa legal para regular la residencia, permanencia y traslado hacia o desde isla de Pascua. Sostiene que otorgó el reconocimiento de carácter legal a pueblos originarios, incluyendo de manera explícita al Pueblo Rapa Nui mediante la Ley No. 19.253 y la Constitución Política reconoce la condición de territorio especial a Isla de Pascua asignándole un régimen particular de gobierno y administración

16. Asimismo, sostiene que luego de 1966 se confeccionaron los Planos Catastrales de Hanga Roa con el objeto de actualizar la tenencia y otorgar planimetría oficial a cada predio entregado anteriormente por la autoridad marítima¹⁵. Posteriormente en 1979 se dictó el Decreto Ley No. 2885 mediante el cual se reguló el otorgamiento de títulos gratuitos de dominio en favor de los originarios de la isla. Desde entonces a la fecha, aproximadamente la mitad de los terrenos que contaban con títulos provisorios en los sectores urbanos y rurales de Hanga Roa han sido objeto del proceso de regularización y se encuentran escritos en el Conservador de Bienes Raíces de Isla de Pascua, existiendo igualmente de forma paralela, un segundo sistema registral de terrenos en la isla mediante el cual se pueden transferir dichos inmuebles a través de cesiones de derecho. Señala que en los ochenta se realizaron dos grandes procesos de entrega de parcelas agrícolas en los sectores de "Orito-Vaihu" de 397 hectáreas y de "Puna-Vaihu" de 196 hectáreas mediante el otorgamiento de Actas de Radicación Provisoria, a jóvenes jefes de familia Rapa Nui y a personas Rapa Nui que cambiaron las parcelas otorgadas por la Armada de Chile. Afirma que con la entrada en vigencia de la mencionada Ley 19.253 en 1993, se les otorgó el carácter de tierra indígena a los terrenos objetos del proceso de regularización en dominio, restringiendo así la transferencia de dichos predios solamente entre miembros del Pueblo Rapa Nui. De la mano a lo anterior, explica que en el 2000 entró en funcionamiento la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, integrada por representantes de distintos Ministerios y del Pueblo Rapa Nui, la cual acordó crear la Subcomisión de Tierras como una instancia en la cual se estudian las solicitudes y requerimientos de los terrenos en el territorio especial, permitiendo un trabajo coordinado y constante entre el Estado y sus representantes gracias al cual se abordan las diversas demandas y requerimientos históricos del Pueblo Rapa Nui con relación a las tierras de la isla.

17. Alega que el Parque Nacional Rapa Nui ocupa más del 43% del territorio de la Isla y goza a la fecha del régimen protector aplicables a las áreas protegidas por el Estado entre las cuales destaca la vinculación al principio de no regresión ambiental y la imposibilidad absoluta de enajenar a particulares ya que la propia ley establece su ámbito de administración en la órbita de los organismos competentes. Al respecto, sostiene que, no obstante, el Ministerio de Bienes Nacionales se encuentra habilitado en virtud del Decreto Ley No. 1939 para entregar en concesión los parques nacionales a las fundaciones y corporaciones para finalidades de conservación y protección del medio ambiente atendiendo su carácter de personas jurídicas sin fines de lucro. En virtud de lo anterior, la Contraloría General de la República autorizó mediante Decreto Supremo No. 119 del 27 de septiembre de 2017 el otorgamiento de una concesión de uso gratuito a una comunidad indígena de la etnia Rapa Nui para la administración del Parque Nacional¹⁶ por el plazo máximo legal de 50 años permitido por el Decreto Ley No. 1939 con carácter renovable¹⁷.

18. Afirma que, en respuesta a las múltiples demandas de los representantes del Pueblo Rapa Nui, impulsó una serie de disposiciones con el objetivo de implementar mecanismos jurídicos para controlar la carga demográfica del territorio especial y así proteger su fragilidad ambiental y preservar su cultura. En dicha

¹⁵ Explica que durante ese periodo los terrenos del sector rural donde funcionaba la CEIP fueron divididos y destinados al funcionamiento del Parque Nacional y del Fundo Vaitea para luego, pasar a manos de la Corporación de Fomento para el Desarrollo de Actividades Agropecuarias como motor económico de la isla, y para la instalación de servicios públicos.

¹⁶ Sostiene que desde la comunidad Rapa Nui, nació la propuesta conocida como Ma'u Henua de acuerdo a la cual se establecería por ley el carácter de Parque Nacional Arqueológico y su administración sería entregada a una organización Rapa Nui en un proceso que contaba con tres etapas: la coadministración, administración autónoma y administración por ley. Al respecto, afirma que esta propuesta fue aprobada en octubre de 2015 mediante un proceso de consulta y votación en Isla de Pascua, Valparaiso y Santiago asistida técnicamente por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. De esta manera, en agosto de 2016 se constituyó la comunidad indígena Ma'u Henua con la inscripción de 1.007 integrantes y actualmente cuenta con más de 2200 miembros.

¹⁷ Agrega que dicha concesión se perfeccionó posteriormente mediante contrato suscrito el 7 de marzo de 2018 entre el Fisco de Chile y Camilo Rapu Riroroko en representación de la comunidad indígena.

línea publicó el 23 de marzo de 2018 la Ley No. 21.070¹⁸ que entró en vigencia el 1 de agosto de 2018 estableciendo una serie de disposiciones legales, administrativas y de gestión pública orientadas a su aplicación. Explica que esta norma incorporó restricciones a la permanencia en la isla y estableció instrumentos de gestión para hacer frente a las consecuencias del aumento demográfico, entre ellos, se constituyó el Consejo de Gestión de Carga Demográfica cuya función es colaborar con los organismos responsables en las materias relacionadas con la residencia y permanencia de personas en Rapa Nui¹⁹. Sostiene así que mediante se declaró el 2 de mayo de 2019 mediante Decreto No. 1428 estado de latencia del territorio especial el cual fue prorrogado a través del Decreto No. 81 de 2020, en los parámetros determinados por la fórmula establecida en la Ley No. 21.070 para realizar los cálculos de capacidad de carga²⁰.

19. En atención a lo anterior, destaca que el Consejo de Gestión de Carga Demográfica en conjunto con la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, la Coordinación Ministerial para Rapa Nui y en general el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, han trabajado en el levantamiento de una serie de medidas instalando una Mesa Interministerial para Rapa Nui en el marco de la cual se convocaron a distintos organismos públicos y reuniones bilaterales con diversos ministerios; se realizaron presentaciones en Rapa Nui y en el continente; y se desarrollaron distintas reuniones y mesas de trabajo con la Municipalidad de Isla de Pascua con representantes locales de organismos públicos y con variadas organizaciones representativas de la comunidad. Destaca que en el desarrollo de este trabajo se abordaron a través de medidas, proyectos e iniciativas de inversión, diferentes aspectos que van en beneficio de la regulación de la población en el territorio; para mejorar las condiciones de vida; contribuir a mejorar las condiciones medioambientales; fortalecer y mejorar la situación del servicio de salud local y materia educacional y gestionar medidas en beneficio de la conectividad del territorio con el continente. Argumenta que este plan que se encuentra en proceso de tramitación, tendrá vigencia de 4 años y será vinculante para la municipalidad, ministerios, servicios públicos y demás órganos de la administración del Estado que operen en la Isla de Pascua.

20. Por otro lado, el Estado sostiene que en el 2018 mediante el Decreto No. 10 del Ministerio del Medio Ambiente, se creó el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Rapa Nui con el objetivo de asegurar la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos teniendo como eje central la cosmovisión del Pueblo Rapa Nui. Argumenta que el mencionado ministerio llevó a cabo un proceso de Consulta Indígena entre los meses de junio y septiembre de 2017 sobre la creación, administración y regulación de usos de un área marina costera teniendo un fuerte respaldo de la comunidad de la isla como fue verificado en la votación celebrada. Explica que se llegaron a varios acuerdos derivados del proceso de consulta indígena, entre ellas, la administración en forma conjunta entre el Estado y representantes del pueblo Rapa Nui mediante un consejo creado para tales efectos el cual se encuentra en funcionamiento habiendo celebrado su primera sesión el 3 de octubre de 2018 y la incorporación de una disposición en el Decreto No. 10 de 2018 del Ministerio de Medio Ambiente tendiente a prohibir cualquier actividad que se contraponga a las tradiciones y costumbres del pueblo indígena Rapa Nui.

21. Asimismo, argumenta que no han sido agotados los recursos legales internos idóneos para conocer la materia que sustenta la petición en virtud que los fundamentos jurídicos que motivaron las acciones

¹⁸ El Estado rescata que se concibió un proyecto de ley cuyo proceso de consulta indígena tuvo lugar el 26 de enero de 2016 ante el Pueblo Rapa Nui a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, como una instancia de diálogo entre el Estado y las instituciones representativa del Pueblo Rapa Nui. Señala que el pueblo indígena estuvo de acuerdo y colaboraron para promover la participación en el proceso de consulta en cuya votación participaron 1.411 votantes pertenecientes al pueblo Rapa Nui. Señala que posteriormente el órgano responsable revisó y sistematizó toda la información del proceso y finalmente luego del trámite legislativo en el Congreso Nacional. En la misma línea sostiene que aprobó Reglamento de la Ley 21.070 publicado en Diario Oficial el 3 de mayo de 2019 el cual fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes del Consejo de Gestión de Carga Demográfica luego de haber sido trabajado por el mismo Consejo, los equipos técnicos en Rapa Nui y el equipo jurídico del Ministerio de Interior.

¹⁹ El Estado explica que este Consejo de Gestión de Carga Demográfica está compuesto por el alcalde, los 5 miembros electos de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, el presidente de Consejo de Ancianos y 3 representantes electos del pueblo Rapa Nui. Sostiene que la Subsecretaría del Interior encabeza el proceso de implementación de dicho cuerpo legal para lo cual coordina un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Gobernación Provincial de Isla de Pascua.

²⁰ Afirma que estos cálculos se realizan teniendo como base las recomendaciones del “Estudio de Capacidad de Carga Demográfica para el Territorio de Isla de Pascua”, de marzo de 2018, realizado por el equipo de Planes y Proyectos Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

ejercidas no dicen relación directa con la reivindicación de la propiedad de las tierras. Alega que existen acciones judiciales adecuadas que ofrece el sistema jurídico chileno como el recurso de protección en relación a los derechos establecidos en el Convenio No. 169 de la OIT, que sería idóneo para resolver la situación jurídica. De la mano, el Estado alega que las presuntas víctimas no agotaron los medios de impugnación contemplados en el sistema procesal vigente en ninguno de los antecedentes jurisdiccionales reconocidos por los peticionarios en su denuncia, esto es, la acción de protección de derechos fundamentales dirigida a que se “declarase el cese del cobro de las concesiones marítimas” y la acción civil tendiente a obtener la declaración judicial de la resolución del tratado o acuerdo de voluntades de 1888.

22. Con respecto a la acción civil, detalla que la misma fue presentada el 2 de septiembre de 2011 ante la judicatura civil, y que esta fue rechazada mediante sentencia de 20 de enero de 2014 y luego, en el marco del recurso de apelación interpuesta, la Corte de Apelaciones confirmó lo fallado. No obstante, argumenta que no se agotaron completamente los recursos que estaban disponibles como el recurso de casación en la forma y/o en el fondo como señalan los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con lo que la sentencia quedó ejecutoriada y se privó al máximo tribunal de conocer la causa. Al respecto, explica que este recurso se concede contra las sentencias definitivas o las sentencias interlocutorias que ponen término al procedimiento en los casos expresamente señalados por la ley y en el presente caso, constituía un procedimiento judicial idóneo²¹. Sostiene que el recurso de casación, especialmente el de fondo, satisface el estándar de idoneidad y eficacia exigido en la medida en que la Corte Suprema ha matizado la noción estricta de “infracción de ley” para admitir la utilización de distintas fuentes del derecho, como una convención internacional o de los derechos fundamentales garantizados en la constitución, como fundamento de las decisiones judiciales. Así, afirma que esta conceptualización de la causal garantiza actualmente un acceso igualmente amplio para presentar dicha impugnación cada vez que exista una errónea aplicación de la ley u otras normas de equivalente relevancia normativa.

23. Argumenta que en la actualidad la casación en el fondo constituye un sistema de control en virtud del cual la Corte Suprema puede ejercer su potestad jurisdiccional para corregir los vicios procesales o incorrectas aplicaciones de la ley. En tal sentido, agrega que una vez presentado el recurso de casación en la forma o en el fondo no es posible enmendar o ampliar las causales, sin embargo, la Corte Suprema puede pronunciarse sobre vicios no alegados por las partes. En el caso particular de la casación en el fondo, la Corte Suprema debe dictar el fallo de reemplazo sin reenviarlo al tribunal de origen.

24. Por último, el Estado argumenta la falta de competencia temporal de la CIDH en tanto considera que parte de los hechos alegados por la parte peticionaria son anteriores a la ratificación e incluso a la existencia de la Convención Americana. Insiste que, en el caso concreto, la parte peticionaria no hace referencia a ningún hecho relacionado con la vulneración del derecho de propiedad que haya tenido lugar con posterioridad a la ratificación de la Convención por el Estado ni se identifican hechos que correspondan a una violación continuada de los artículos 8 y 25 de la CADH. El Estado indica que los hechos ocurridos con posterioridad al año 2012 no dicen relación directa con una vulneración del derecho de propiedad mientras no se identifican hechos que correspondan a una violación continuada de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.

VI. AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

25. La parte peticionaria alega que no existen recursos judiciales idóneos adicionales a los ya interpuestos para remediar la situación y para proteger los derechos colectivos de propiedad de las comunidades indígenas configurándose una excepción contemplada en el artículo 46.2.b. de la Convención. Sostiene, no obstante, haber agotado los recursos presentados el 24 de julio de 2014, con respecto a la acción

²¹ El Estado asegura que el ámbito de revisión de la casación en el fondo es exclusivamente cuestiones de derecho y no hecho, sin embargo, indirectamente los hechos de la causa podrán ser revisados solo si pueden ser reconducidos a una cuestión de derecho. Con respecto a la casación en la forma, explica que tampoco tiene como ámbito de revisión en sí mismo las cuestiones de hecho, pero puede llegar a ser procedente la rendición de prueba cuando sea necesaria para la acreditación del vicio procesal que se invoca, entre los cuales resalta, que el tribunal era incompetente, juez implicado, *ultrapetita*, incumplimiento de los requisitos de la sentencia, falta de notificación válida de la demanda, infracción a la cosa juzgada, decisiones contradictorias o faltar un trámite esencial definido por ley, entre otras también establecidas en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

civil, y el 4 de diciembre de 2014 respecto al recurso de protección. Por su parte, el Estado alega que no han sido agotados los recursos legales internos idóneos para conocer la materia que sustenta la petición en virtud que los fundamentos jurídicos que motivaron las acciones ejercidas no dicen relación directa con la reivindicación de la propiedad de las tierras. Adicionalmente argumenta la idoneidad del recurso de protección y, en sede civil, el recurso de casación.

26. Para efectos de determinar la vía procesal adecuada en el ordenamiento interno la Comisión considera necesario establecer, preliminarmente, el objeto de la petición presentada a su conocimiento. Al respecto observa que no es controvertido que el objeto de la presente petición incluye el reconocimiento legal de la propiedad del Pueblo Rapa Nui sobre las tierras y recursos naturales de la Isla de Pascua. Asimismo, destaca que de acuerdo a lo alegado por la parte peticionaria y no controvertido por el Estado, no hay en la normativa estatal recursos judiciales internos relativos específicamente al reconocimiento de la propiedad colectiva sobre tierras de los pueblos indígenas.

27. De la información disponible en el expediente, la Comisión nota que las presuntas víctimas han sostenido de manera reiterada la falta de reconocimiento y protección de su territorio, así como de diversos derechos de la comunidad presuntamente vulnerados, en sede administrativa y judicial con el fin de amparar los derechos que alegan han sido violados por el Estado. La Comisión observa que los recursos y solicitudes interpuestas en nombre del pueblo Rapa Nui han estado estrechamente vinculados con el ejercicio y protección del derecho a la propiedad colectiva sobre su tierra ancestral y los recursos provenientes de la misma. En concreto, las presuntas víctimas interpusieron el 20 de enero de 2012 una acción resolutoria civil contra el Fisco por el incumplimiento del Acuerdo de Voluntades alegando la afectación a la propiedad sobre su territorio y los efectos de dicha afectación sobre el Pueblo Rapa Nui, el cual culminó con sentencia de la Corte de Apelaciones del 24 de julio de 2014 con resolución del 28 de agosto de 2014. Asimismo, interpusieron una solicitud al Subsecretario para las Fuerzas Armadas y un recurso de protección en relación al cobro de concesiones marítimas a pescadores artesanales miembros del Pueblo Rapa Nui alegando igualmente una vulneración al ejercicio de su derecho de propiedad colectiva sobre la tierra y sus recursos, el cual fue desestimado por la Corte Suprema mediante sentencia del 24 de noviembre de 2014 con resolución de 4 de diciembre del mismo año. La Comisión observa igualmente las solicitudes de diálogo interpuestas por el Pueblo en el 2014 y luego en el marco de la firma del Convenio de Asociatividad con la transferencia de la administración plena del Parque Nacional Rapa Nui al Pueblo Rapa Nui en el 2017. La Comisión recuerda que los procedimientos para titular tierras comunales indígenas o tribales deben ser efectivos y deben permitir ser presentados por las comunidades afectadas y no sólo por individuos particulares. En tal sentido, la mera posibilidad de reconocimiento de derechos a través de ciertos procesos judiciales no sustituye el reconocimiento real de dichos derechos²².

28. En este sentido, con respecto a la acción civil presentada, la Comisión nota que el argumento del Estado descansa en la falta de agotamiento del recurso de casación. Al respecto la Comisión recuerda que, si bien en algunos casos los recursos extraordinarios pueden ser adecuados para enfrentar violaciones de derechos humanos, como norma general los únicos recursos que es necesario agotar son aquellos cuyas funciones, dentro del sistema jurídico, son apropiadas para brindar protección tendiente a remediar una infracción de determinado derecho legal. En principio, se trata de recursos ordinarios y no extraordinarios²³. Asimismo, la Comisión ha sostenido que el requisito de agotamiento de los recursos internos no significa que las presuntas víctimas tengan la obligación de agotar todos los recursos que tengan disponibles. Tanto la Corte, como la Comisión han sostenido en reiteradas oportunidades que "(...) la regla que exige el previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios". En consecuencia, si la presunta víctima planteó la cuestión por alguna de las alternativas válidas y adecuadas según el ordenamiento jurídico interno y el Estado tuvo la oportunidad de remediar la

²² CIDH, Informe No. 30/17. Petición 1118-11. Admisibilidad. Comunidad Maya Q'eqchi' Agua Caliente. Guatemala. 18 de marzo de 2017.

²³ CIDH, Informe No. 161/17, Petición 29-07. Admisibilidad. Andy Williams Garcés Suárez y familia. Perú. 30 de noviembre de 2017, párr. 12.

cuestión en su jurisdicción, la finalidad de la norma internacional está cumplida²⁴. Si bien las presuntas víctimas tenían la posibilidad de seguir agotando otras instancias judiciales, la Comisión considera que éstas le dieron al Estado la oportunidad de conocer los reclamos hechos por la comunidad, así como de remediar las violaciones de derechos humanos que se les imputan, y el Estado no alegó que los recursos interpuestos no habían sido idóneos.

29. Asimismo, en relación al alegato del Estado relativo al recurso de protección, la Comisión nota que, de acuerdo a la información disponible, para interponer el recurso de protección, el plazo es de 30 días corridos contados desde que ocurre el acto o amenaza que motiva el recurso o desde que se tuvo conocimiento de dicho acto o amenaza, hecho que debe ser acreditado ante la Corte. La Comisión considera que, de acuerdo con este plazo, y dado que los alegados hechos de usurpación de tierras se dieron en 1888 y en 1933 producto del alegado incumplimiento del Acuerdo de Voluntades y de la inscripción, el recurso de protección no sería un recurso adecuado para el Pueblo Rapa Nui en este caso.

30. La Comisión observa que las presuntas víctimas interpusieron dicho recurso en abril de 2014 ante la Corte de Apelaciones de Santiago mediante el cual solicitaron el cese del cobro de concesiones marítimas e incluyeron argumentos sobre las violaciones históricas sufridas en el ejercicio de su derecho a la propiedad colectiva como pueblo indígena sobre la tierra y sus recursos. La Corte de Apelaciones concedió este recurso, pero la Corte Suprema revocó la decisión, reafirmando el criterio estricto del plazo, al argumentar la interposición extemporánea del recurso en tanto el plazo de 30 días debía contarse desde el otorgamiento de una concesión, la cual había sido otorgada en el 2011, y no desde la respuesta formal de la Subsecretaría a un requerimiento del Consejo de Ancianos.

31. Por lo tanto, la Comisión concluye que en el presente caso aplica la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46.2.a de la Convención Americana²⁵.

32. Finalmente, la Comisión observa que la petición fue recibida el 23 de enero de 2015 y la decisión de la Corte Suprema en relación al recurso de protección es de fecha de 24 de noviembre de 2014 con resolución de 4 de diciembre del mismo año. En vista de las características de la presente petición, la Comisión considera que ésta fue presentada dentro de un plazo razonable y que debe darse por satisfecho el requisito de admisibilidad referente al plazo de presentación.

VII. CARACTERIZACIÓN Y COMPETENCIA

33. Con respecto al alegato planteado por el Estado relativo a la falta de competencia de la Comisión Interamericana para conocer de hechos ocurridos con anterioridad a la ratificación de la Convención Americana por parte de Chile, la Comisión reitera que la petición se refiere al continuo desconocimiento de la propiedad colectiva del Pueblo Rapa Nui sobre la Isla de Pascua y la vulneración al derecho a la libre determinación de las presuntas víctimas, en particular en relación a las solicitudes interpuestas en sede administrativa y judicial a partir del 2012, adoptadas cuando la Convención ya estaba en vigor para Chile. Si bien algunos de los hechos denunciados tienen origen en actos que se habrían iniciado con anterioridad a la fecha referida, varios de los efectos se extienden hasta el presente.

34. A los efectos de la admisibilidad, la Comisión recuerda que el criterio de evaluación de esos requisitos difiere del que se utiliza para pronunciarse sobre el fondo de una petición; la Comisión debe realizar una evaluación *prima facie* para determinar si la petición establece el fundamento de la violación, posible o potencial, de un derecho garantizado por la Convención, pero no para establecer la existencia de una violación de derechos. Esta determinación constituye un análisis primario, que no implica prejuzgar sobre el fundamento del asunto.

²⁴ CIDH, Informe No. 62/14, Petición 1216-03 Admisibilidad. Pobladores de QuishqueTapayrihua. Perú. 24 de julio de 2014, párr 30.

²⁵ CIDH, Informe No. 30/17, Petición 1118-11. Admisibilidad. Comunidad Maya Q'eqchi' Agua Caliente. Guatemala. 18 de marzo de 2017, párrs. 37 y 38.

35. La Comisión observa que la presente petición incluye alegaciones con respecto a situaciones recientes que demuestran el continuo desconocimiento de la propiedad colectiva del Pueblo Rapa Nui sobre la Isla de Pascua. En particular, presentan alegaciones en relación al desconocimiento de la propiedad colectiva del Pueblo Rapa Nui sobre el territorio y recursos naturales de la Isla de la Pascua; las limitaciones en el acceso pleno a sus territorios; el desconocimiento de la libre determinación del Pueblo Rapa Nui y la falta de procedimientos idóneos a efectos de reivindicar su derecho a la propiedad así como los presuntos efectos sobre la falta de reconocimiento y protección de su propiedad ancestral en sus condiciones de vida, salud y el desarrollo de Pueblo Rapa Nui.

36. Con respecto a las alegaciones sobre la ausencia de un procedimiento para la titulación de las tierras comunales indígenas, sobre que ni los procedimientos administrativos ni judiciales habrían sido eficaces para garantizar los derechos territoriales de la comunidad así como sobre la falta de reconocimiento de la propiedad colectiva del Pueblo Rapa Nui sobre su territorio ancestral, la Comisión observa que tienden a caracterizar una presunta violación de los artículos 8, 21 y 25 de la Convención Americana. Con respecto a las alegaciones sobre la falta de acceso a centros arqueológicos, los problemas de sobrepoblación, desabastecimiento, contaminación y acceso a servicios básicos, la Comisión observa que tienden a caracterizar una presunta violación de los artículos 4, 12 y 21 de la Convención Americana.

37. En atención a estas consideraciones y tras examinar los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes la Comisión estima que las alegaciones de la parte peticionaria no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos podrían caracterizar violaciones a los artículos 4 (derecho a la vida)²⁶, 8 (garantías judiciales), 12 (libertad de conciencia y religión), 21 (derecho a la propiedad) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en perjuicio de la comunidad indígena Rapa Nui, todos a la luz de los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento.

VIII. DECISIÓN

1. Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 4, 8, 12, 21 y 25 de la Convención Americana en conexión a los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento.

2. Notificar a las partes la presente decisión; continuar con el análisis del fondo de la cuestión; y publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los 14 días del mes de julio de 2021. (Firmado): Julissa Mantilla Falcón, Primera Vicepresidenta; Flávia Piovesan, Segunda Vicepresidenta; Margarette May Macaulay, Esmeralda E. Arosemena Bernal de Troitiño, Joel Hernández y Stuardo Ralón Orellana (en disidencia), Miembros de la Comisión.

²⁶ CIDH, Informe No. 2/02, Petición 12.313. Admisibilidad. Comunidad Indígena Yaxye Axa del Pueblo Enxet-Lengua. Paraguay, 27 de febrero de 2002; y CIDH. Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía. OAS/Ser.L/V/II. Doc. 176, 29 septiembre 2019, párrs. 41 y 42. Respecto a la relación de los artículos 4, 26 y 1.1. ver Corte IDH. *Caso Comunidad Indígena Yaxye Axa vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs 158, 162 y 168; Corte IDH, *Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 153; y Corte IDH. *Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay*, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párrs. 215 y 217.

La que suscribe, Marisol Blanchard, en su carácter de Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento de la Comisión, certifica que es copia fiel del original depositado en los archivos de la Secretaría de la CIDH.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MB', written in a cursive style.

Marisol Blanchard
Secretaria Ejecutiva Adjunta